



Desarrollo y Sociedad

ISSN: 0120-3584

revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Colombia

Mareco dos Santos, André

Instituciones o cultura: ¿de qué materia prima está hecha la legitimidad de las nuevas democracias?

Desarrollo y Sociedad, núm. 58, septiembre, 2006, pp. 261-289

Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169114683008>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Instituciones o cultura: ¿de qué materia prima está hecha la legitimidad de las nuevas democracias?

Institutions or culture: What is the raw material for the legitimacy of new democracies?

André Marenco dos Santos*

Resumen

En los últimos años, se han retomado perspectivas teóricas que sostienen que la cultura, los valores y las creencias compartidas por los ciudadanos son condiciones para el desarrollo y la democracia (Putnam, 1996; Inglehart, 2002). Contrario a estos abordajes analíticos, la finalidad de este trabajo es demostrar que los valores cívicos o el capital social no constituyen requisitos para fundar instituciones democráticas en el plan nacional. Para verificar esta hipótesis, el presente trabajo intenta comparar 47 naciones, con distintos modelos institucionales y valores culturales. La información referente a los valores culturales se aisló con base en el índice de capital social, producido a partir del World Values Study. El índice empleado para formalizar y medir diversos grados de democratización alcanzados en diferentes sociedades nacionales, fue el generado por Freedom House, producido a partir de una combinación de valores referentes a derechos políticos, libertades civiles, características del régimen político,

* Doctor en Ciencia Política y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Correo electrónico: amarenco@terra.com.br. Agradezco a Iván Angues Bambarén por su colaboración con la traducción del texto al español.

Este artículo fue recibido el 2 de mayo de 2006, modificado el 12 de noviembre de 2006 y aceptado el 23 de noviembre de 2006.

expectativa de vida y renta per cápita. Las correlaciones observadas entre indicadores de capital social y democracia fueron modestas. El examen comparativo muestra países que presentan una configuración democrática, al lado de bajos índices de capital social, sobre todo entre las nuevas democracias, desviándose, por tanto, de las predicciones del enfoque de capital social. La principal conclusión es que valores cívicos o altos niveles de capital social no son condiciones para fundar instituciones democráticas. Los datos sugieren, alternativamente, que hay una relación entre mayor dispersión de poder compartido o *power-sharing* (Lijphart, 1996) y formación de instituciones poliárquicas, y sostienen una recomendación de que cuando los niveles de desarrollo y valores cívicos son bajos, dividir el poder es la mejor condición para la constitución de democracias.

Palabras clave: valores cívicos, poliarquía, instituciones políticas, democratización, poder compartido.

Clasificación JEL: H190, Z130.

Abstract

In the last years, have been retaken a theoretical perspective that maintain that the culture, values and beliefs shared by the citizens, are conditions for development and the democracy building (Putnam, 1996; Inglehart, 2002). In opposition to these analytical approaches, the purpose of this work is to demonstrate that civic values or social capital do not constitute prerequisites to found democratic institutions on the national plan. In order to verify this hypothesis, the work tries to compare a set of 47 nations, with different institutional frameworks and cultural values. The information referring to the cultural values was isolated with base in the index of social capital, produced from the World Values Study. The used index to formalize and to measure degrees of democratization in different national societies was the generated one by Freedom House, produced from a combination of referring values to political rights, civil liberties, characteristic of the political regime, life expectancy and rent per capita. The correlations observed between indicators of social capital and democracy were modest. The comparative analysis shows countries that present

a democratic configuration, with low indices of social capital, overall between the new democracies, in opposing to the predictions of the social capital approach. The main conclusion is that civic values or high levels of social capital are not conditions to found democratic institutions. The data suggest, alternatively, a strong relation between greater power-sharing (Lijphart, 1996) and democratic institutions building, maintaining a recommendation of which when levels of development and civic values are low, to divide the power it is the best condition for the constitution of new democracies.

Key words: civic values, poliarchy, political institutions, democratization, power-sharing.

JEL Classification: H190, Z130.

Introducción

Cierto desencanto frente a los resultados obtenidos por nuevas democracias –especialmente en el este europeo y América Latina– impri-mió en la agenda de la ciencia política, durante los años noventa, una indagación acerca de lo que estaría faltando a estas experiencias, que las tornarían más susceptibles de replicar el desempeño eficaz de instituciones democráticas, como en el ejemplo pionero de Europa Occidental y de Estados Unidos. El diagnóstico de la adopción de modelos institucionales poliárquicos estaría siendo insuficiente, frente a la precaria tradición democrática de esas sociedades, pues orientó, a los investigadores a perseguir una pista cuyas coordenadas serían la cultura, los valores y las creencias compartidas por los ciudadanos, como dimensión explicativa más relevante para dar cuenta del éxito o fracaso de proyectos democráticos nacionales (Huntington, 2002).

En oposición a modelos que postulan una relación causal entre patrones culturales y democracia, la hipótesis que orienta este trabajo sugiere que los valores cívicos y las reservas de capital social no constituyen condición para la fundación de instituciones democráticas. Para probar esta proposición, se realizó un examen comparativo con 47 países, considerando indicadores de democratización y valores relativos al capital social registrado en cada caso. El análisis buscó desagregar

los casos estudiados, considerando dos grupos: las viejas democracias o poliarquías institucionalizadas y un segundo grupo, constituido por las nuevas democracias y, también, por países no democráticos. A continuación, el estudio procuró mostrar que no existen variaciones significativas en los niveles de capital social capaces de explicar las diferencias entre nuevas democracias y países no democráticos, confirmado que los procesos de democratización no exigen la presencia previa de altos niveles de cultura cívica o capital social. Finalmente, la introducción de factores institucionales como variable independiente, operacionalizando la noción de *power-sharing* (Lijphart, 1997) a través de la dimensión de las bancadas parlamentarias de gobierno, permitió captar una asociación significativa entre menor concentración decisoria y mayor dispersión de poder y la formación de nuevas poliarquías. En esta perspectiva, se considera que la asociación entre cultura cívica y democracia observada en comparaciones sincrónicas, puede esconder un importante rasgo: naciones con poliarquías institucionalizadas presentan también altos índices de capital social; no en tanto esta observación no sea suficiente para afirmar que los valores cívicos hayan constituido la condición para la estabilidad de sus instituciones democráticas, pudiendo, inversamente, haber sido el resultado de la continuidad temporal de estas instituciones. En este caso, la dirección de causalidad sería contraria a la del modelo culturalista: instituciones democráticas habrían sido responsables por la generación de valores cívicos.

I. ¿La cultura importa?

Dentro de los abordajes culturalistas, el producto de mayor repercusión tal vez haya sido el concepto de *capital social*, inspirado a partir de los trabajos de Robert Putnam. Sin embargo, una genealogía intelectual puede localizar sus orígenes más remotos; fue con Putnam que el *capital social* probablemente adquirió el estatus y la audiencia responsables de convertirlo en piedra angular de investigaciones en áreas tan diversas. En palabras del autor, el *capital social* parece tener un significado simple: “La cooperación voluntaria y más fácil en una comunidad que haya heredado un buen stock de capital social bajo la forma de reglas de reciprocidad y sistemas de participación cívica. Aquí, el capital social se refiere a las características de la organiza-

ción social, como confianza, normas y sistemas que contribuyan para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando las acciones coordinadas... el capital social facilita la cooperación espontánea” (Putnam, 1996, p. 177). Para Putnam, una reserva de capital social ofrecería la solución para interacciones condicionadas por problemas de tipo *dilema del prisionero*, donde externalidades y escasez de información incentivan la elección de acciones no cooperativas, generando resultados trágicos para todos los individuos involucrados¹. En contraste, el *capital social* incentivaría a la cooperación espontánea, cuyo ejemplo sería encontrado en las cooperativas de crédito rotativo, marcadas –según Putnam– por la presencia de confianza y normas de reciprocidad compartidas, necesarias para reducir la duda en cuanto a la cooperación de los demás y fomentar una expectativa de ganancias futuras asociadas a una acción concertada. Distinguendo la reciprocidad específica –cambio simultáneo de bienes de valor equivalente– y generalizada (no correspondencia temporal y en el valor de los bienes permutados), Putnam identifica en ésta última, la revelación de una reserva de capital social que actúa en los intersticios de las interacciones sociales.

Siguiendo en esta senda, Fukuyama advierte que el capital social no correspondería apenas a cualquier norma o valor compartido, toda vez que éstos pueden ser los *errados*. Sin embargo, reconociendo que constituyen dimensiones de difícil medida, *honestidad y reciprocidad* serían los valores que, de acuerdo con Fukuyama (2002, p. 151), traducirían la presencia de una reserva de capital social, necesaria para reducir “costos de transacción” (North, 1990) y asegurar el cumplimiento de acuerdos formales. Aquí, es difícil no percibir un tono ingenuo que curiosamente aproxima esta reflexión académica de lenguaje empleada en sermones de *moral y cívica*: “las normas que producen el capital social, precisan incluir, sustantivamente, virtudes como

¹ De esta forma, según Putnam, “dichas redes facilitan la coordinación y la comunicación, amplían reputaciones, y de esta manera, permiten que se resuelvan dilemas de acción colectiva. Cuando la negociación económica y política está encajada en redes densas de compromiso cívico, incorpora éxito en la colaboración en el pasado, lo cual puede servir como plantilla cultural para una futura colaboración. Finalmente, las densas redes de interacción probablemente amplían el sentido del yo de los participantes, transformando el ‘Yo’ en el ‘nosotros, o (en el lenguaje de los teorizadores de elección racional) aumentando el ‘gusto’ de los participantes por los beneficios colectivos”. (Putnam, 1995, p. 67)

hablar la verdad, cumplir obligaciones y ejercer la reciprocidad” (Fukuyama, 2002, p. 156).

De forma semejante, Inglehart también distingue diferentes tipos de valores compartidos y tradiciones culturales, correspondientes a la *sobrevivencia* o *autoexpresión*. En el primer caso, las sociedades presentan bajos niveles de “bienestar subjetivo, relatan salud relativamente débil, son deficientes en confianza interpersonal, son relativamente intolerantes con grupos de fuera, demuestran poco apoyo a la igualdad entre los sexos, enfatizan valores materialistas, tienen niveles relativamente altos de fe en la ciencia y en la tecnología, son relativamente débiles en activismo ambientalista y son relativamente favorables a un gobierno autoritario. Las sociedades que enfatizan los valores de autoexpresión tienden a mostrar preferencias contrarias en todos estos tópicos” (Inglehart, 2002, p. 138). Confianza interpersonal, tolerancia y participación en los procesos decisarios serían atributos de culturas de *autoexpresión* que las tornarían, según Inglehart, más próximas a generar democracias estables. No parece difícil notar, en este punto, una descendencia conceptual de la noción de cultura cívica, popularizada en los años sesenta a partir de los trabajos de Almond y Verba. En común, la noción de desarrollo, está orientada, ahora, en la perspectiva de valores *racionales, tolerantes, confiantes y posmodernos*. El desarrollo económico para Inglehart, estaría seguido por el declive de los valores religiosos, del provincialismo y de identidades culturales, que contribuyen a desgastar los valores tradicionales y a promover la generación de una cultura asociada a la democracia.

Putnam sugiere que las diferencias regionales verificadas en Italia serían el resultado de reservas desiguales de capital social encontrados en el norte y sur de aquel país. “La comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ésta es una afirmación deprimente para los que ven la reforma institucional como estrategia de cambio político” (Putnam, 1996, p. 192). La dinámica moderna de la economía y de la sociedad, sumadas al éxito de políticas de descentralización administrativas, observadas en las comunidades del norte italiano, serían explicadas, así, como resultados de la tradición de participación cívica, cuyas raíces remontarían a la *colaboración horizontal* encontrada en la experiencia de las ciudades republicanas de Italia septentrional entre los siglos XI y XIV. En contraste, el clientelismo arraigado en la

cultura del Sur sería heredado de los patrones autocráticos y feudales no disueltos por las ondas del Renacimiento. Semejante convicción en el peso impuesto por tradiciones históricas puede ser encontrado todavía en Inglehart (2002) y de modo más evidente, en la hipótesis propuesta por Lipset y Lenz (2002), asociando intervención estatal a la influencia católica e, inversamente, preferencia por el mercado y libre-iniciativa, a una cultura protestante.

Igualmente, los condicionamientos producidos por patrones culturales de largo plazo no serían irreversibles. Así, se puede entender la inquietud de Putnam con relación a lo que le parece constituir una tendencia al declive en la reserva del capital social y en el acoplamiento cívico en Estados Unidos. “Hoy, más que nunca, un mayor número de Americanos juega boliche, pero en las ligas organizadas, este juego ha caído en picada alrededor de la última década” (Putnam, 1995, p. 70). La metáfora del individuo que juega boliche, sólo fue empleada para revelar la pérdida en el vigor cívico y en la participación asociativa en curso, según Putnam. Si los indicadores del fenómeno parecen convincentes [caída en la participación electoral y en la afiliación a asociaciones voluntarias], más perturbadoras son las supuestas razones, presentadas por Putnam para explicar el declive cívico. En primer lugar, la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo ha “reducido el tiempo y la energía disponibles para la construcción de capital social” (Putnam, 1995, p. 74). En paralelo, mayor movilidad territorial disolvió un patrón de propiedad residencial estable, base de las relaciones de vecindad, en las cuales estaban fundadas las raíces sociales de la participación cívica; además, la erosión de núcleos familiares, generada por la reducción en la frecuencia de matrimonios, disminución del número de hijos e incremento en la tasa de divorcios², volvió más frágiles las redes responsables de la generación de ese capital social; finalmente, la televisión habría alterado e individualizado el patrón de acceso a la información para el ciudadano americano.

² “Cada uno de estos cambios puede dar cuenta de cierta reducción en el compromiso cívico, ya que los padres casados de clase media generalmente están más involucrados socialmente que otras personas”. (Putnam, 1995, p. 75).

Si la presentación conceptual del *capital social* traducido en normas, redes sociales, reciprocidad, participación cívica, parece inocentemente simple, es en el diagnóstico de su erosión y del declive de la participación cívica que los contornos más preocupantes de esta obra teórica aparecen a tono. Parece difícil ignorar el romanticismo conservador presente en la nostalgia por una América perdida. Cuando Putnam exalta a la comunidad local, la vecindad, la familia, se puede oír el eco de una *gemeinschaft* tradicional que poco tiene en común con la utopía de la ampliación en la mira de la ciudadanía a través de su inclusión en los procesos decisarios públicos. La comunidad de Putnam tiene en la familia su eslabón socializador fundamental; en la mujer desocupada y sociable su urdidura, y en la leyenda del núcleo residencial local, el territorio y la historia en que se apoya.

No se debe menospreciar, tampoco, la advertencia de Norris: “La tolerancia y la confianza de los miembros dentro de la comunidad no necesariamente significa la tolerancia de los forasteros, algunas veces simplemente sucede lo contrario” (2002, p. 6), al sugerir que una fuerte concentración de redes sociales y normas compartidas no siempre equivalen a cooperación generalizada, pudiendo representar también fuentes de conflictos, incluso del tipo suma-cero. La experiencia de Colombia puede ofrecer referencias relevantes al respecto (Pécaut, 1997).

El mito tocquevillano de una nación construida bajo el esfuerzo de los *condados sin el conde*, oponiéndose al despotismo centralizador del Estado nacional, curiosamente representa el *leit-motiv*, ya sea para tradiciones intelectuales que precisan rastrear valores y patrones culturales fundacionales, a partir de los cuales, las instituciones singulares se habrían erguido [y solamente lo habrían hecho por causa de este cimiento], para aún menos respetables versiones de este romanticismo comunitario, localizados en el mundo político americano, particularmente entre republicanos conservadores.

Como lo demuestra Theda Skocpol, la era tocquevillana de la asociación, entre 1820 y 1840, estaba lejos de la imagen idealizada, de la simple profusión de comunidades locales autóctonas, siendo el resultado de la inducción provocada por instituciones extralocales sobre las organizaciones de los *simples ciudadanos*. En primer lugar, como recuerda Skocpol, ella corresponde al contexto movilizador provoca-

do por la ampliación del sufragio adulto masculino y el surgimiento de los partidos competitivos. En su camino, periódicos y revistas tuvieron un papel sinérgico con las asociaciones locales. Finalmente, subraya Skocpol, no se debe despreciar el impacto provocado por el crecimiento del servicio postal americano, ampliando el acceso a las informaciones, pero, sobre todo, como representación de la administración federal en las pequeñas municipalidades. Partidos, periódicos y correos habrían desempeñado, así, una tarea de agregación en torno a los núcleos locales, haciendo de la *participación cívica* algo que va mucho más allá de la leyenda de una cooperación espontánea, externa y anterior a las instituciones políticas (Skocpol, 1997).

En perspectiva análoga, Tarrow (1996) cuestiona la causalidad propuesta por Putnam [sociedad civil > capital social > instituciones políticas democráticas] para interpretar la experiencia italiana y las diferencias observadas entre el Sur y el Norte. Su crítica se dirige, en primer lugar, a la selectividad en el uso de evidencias históricas, con el desprecio, por Putnam, de hallazgos que podrían cuestionar sus hipótesis, como las raíces no *horizontales* de las asociaciones en el Norte, la influencia septentrional en la generación del fascismo y el fenómeno de corrupción política, centrados en el norte italiano, al inicio de los años noventa. En paralelo, Tarrow propone una hipótesis alternativa a la de Putnam, sugiriendo que las fuerzas políticas habrían creado, en el Norte, un ambiente en el que la sociedad civil septentrional podía florecer: “La causa operativa de la actuación (rendimiento) de las instituciones regionales tanto en el Sur como en el Norte, no es ni cultural ni asociativa, sino política” (Tarrow, 1996, p. 394). En otras palabras, la proposición de Tarrow representa una inversión en la conexión causal, indicando que la estructura política – como las ciudades-república del Norte – es lo que habría generado gobiernos republicanos y sociedad civil pujante. De la misma forma, el tipo de estructura estatal habría sido responsable por los patrones menos *cívicos* de comportamiento político verificados en el Sur³.

³ “Cada régimen que gobernó el sur de Italia, desde el sistema Normando de una monarquía centralizada en el siglo XII, hasta el gobierno unificado que asumió el cargo en 1861, era extranjero y gobernado con una lógica de explotación colonial (...) un régimen más fuerte, más rico y más legítimo conquistó a uno más débil, más pobre y más marginal, induciendo a sus residentes a la vida política por medio de las herramientas del patronato, el paternalismo y el poder del dinero” (Tarrow, 1996, p. 394).

II. ¿Haga lo que yo digo... o haga lo que yo hago?

Las virtudes predictivas del *capital social* están fundadas, sobre todo, en una premisa que consiste en la conexión entre valores (o preferencias) y el curso de acción adoptado por los agentes. Esto significa que las creencias manifestadas por los individuos nos permitirían inferir, con una buena dosis de seguridad, la posibilidad de seguir tal o cual orientación en relación con las instituciones políticas. De la misma forma, su comportamiento se podría descifrar a partir de la identificación de los valores que éstos traen consigo. Normas de reciprocidad generalizadas y redes de relaciones sociales serían, así, buenos augurios para instituciones democráticas. La precaria confianza social, al contrario, debería alertarnos en cuanto al destino de experimentos democráticos en curso.

Las matrices que informan este esquema analítico se pueden encontrar bien en el *behaviorismo* de los años cincuenta, como en la versión *individualismo metodológico* de las teorías de la acción racional, pujantes en los años setenta. Para ambas, los valores o las preferencias son formados exógenamente, en relación con el juego político, y condicionan la configuración y dinámica de las instituciones.

La teoría institucional promovió una inflexión en este flujo, atribuyendo a la estructura de las instituciones más de lo que el estatus de resultado de la agregación de preferencias o valores y, sobre todo, la variable capaz de promover la conversión de éstas en acciones, no necesariamente correspondientes a sus características originales. No obstante, manteniendo la formación de preferencias como un proceso previo y exógeno a las instituciones políticas, la perspectiva adoptada por los institucionalistas de la elección racional consiste en circunscribir la opción de la acción como resultado de mecanismos *endógenos* a las instituciones. De cualquier modo, se dejó de lado una conexión directa **preferencias > acción**, en la cual aquellas constituían los mejores indicadores de ésta, sustituidos ahora por una conexión **preferencias > instituciones > acción**, en el cual el curso de la acción no es el resultado necesario de los valores informados, siendo refractados por los condicionamientos institucionales, que pueden producir incluso alternativas no anticipadas o contradictorias con las creencias reveladas. Así, la estructura de oportunidades ofrecida por reglas e

incentivos institucionales pueden conducir a opciones subóptimas (como en los *nested games* de Tsebelis), delante de la impracticabilidad para alcanzar el resultado deseado.

Si en un escenario marcado por la ausencia de premios y sanciones institucionales, un comportamiento *free-rider* puede representar el curso más racional de acción; lo que podría explicar la ocurrencia frecuente de movimientos colectivos, obediencia a las instituciones legales, formación de mayorías legislativas, afluencias a las cabinas de votación –aunque muchas veces las palabras de los individuos sugieren lo contrario–, debe ser buscado en las condiciones que producen una reversión en las inclinaciones individuales originales, promovida por la estructura institucional.

Satz y Ferejohn llaman la atención sobre el hecho de que la racionalidad presumible de la acción social puede residir no en el comportamiento de un individuo en particular (interpretación internalista de la teoría de elección racional), sino en regularidades que orientan el comportamiento de un conjunto de individuos “las estructuras de interacción social en los mercados, gobiernos y otras instituciones. En muchas explicaciones socio-científicas, no estamos interesados en explicar el comportamiento de un representante en particular, sino en las regularidades generales que rigen el comportamiento de todos los agentes. En tales casos, no son las psicologías de los representantes las que ante todo explican sus comportamientos, sino las obligaciones medioambientales que ellos enfrentan” (Satz y Ferejohn, 1994, p. 74). Aquí, las instituciones desempeñan un patrón selectivo, eliminando comportamientos discrepantes en relación a su estructura de premios y sanciones, como la generosidad cristiana en el mercado económico, el fundamentalismo ideológico en la competencia electoral, la libido sexual en el campo religioso, etc. Los comportamientos racionales son aquellos capaces de adaptarse a las condiciones de la oferta y demanda promovidas por las instituciones dentro de las cuales se desarrolla la acción.

Las instituciones sobreviven cuando son capaces de producir respuestas eficaces para los problemas de generación de acción colectiva. Ello implica la reducción en los costos de transacción social, sobre todo, resultantes de las externalidades presentes en la producción de bienes

sociales y de la obtención de la información necesaria para la coordinación de comportamientos cooperativos. De otra forma, si el lapso que separa la elección de cursos alternativos de acción por los individuos, de comportamientos cooperativos, puede ser representado por la confianza como la reciprocidad en el comportamiento de los demás, parece poco convincente suponer, que la creación espontánea de esa confianza social no sólo anteceda (y no dependa) de algún cuadro institucional propicio (por más rudimentario que éste sea), como condición para su surgimiento.

La confianza recíproca puede constituir un antídoto para cortocircuitos en la acción social, representados en modelos del tipo *dilema del prisionero*. Con todo, la constitución de lazos de confianza recíproca entre los individuos en contextos análogos parece ser, sobre todo, el resultado de una estructura de oportunidades específicas. En primer lugar, las interacciones repetidas en el tiempo son una condición para que, teniendo la posibilidad de medir las consecuencias de la opción, cada agente pueda disponer no sólo de más información, sino también de influir sobre las opciones de su(s) interlocutor(es). La repetición de las decisiones interdependientes puede ofrecer la solución al *dilema del prisionero*, en la medida que crea condiciones para el monitoreo del comportamiento de los demás, representa ganancias o pérdidas de reputación social y permite recursos de punición al transgresor. Algunas peculiaridades del cuadro institucional afectan de tal forma en que las interacciones repetidas amplían la reserva de información, reputación social y potencial de sanción al comportamiento de los participantes: el tamaño de la organización, sus fronteras, la escala de la repetición y la existencia de normas previas (Ostrom, 1990).

El tamaño de la organización corresponde a un hallazgo consagrado por Mancur Olson: la probabilidad de acción concertada es una función en la medida que los actos individuales son perceptibles para los demás miembros de un grupo. Así, en grupos grandes, la participación de un miembro individual podrá ser imperceptible a los ojos de los demás, ampliando los costos organizativos para la generación de la acción. De la misma forma, la ganancia individual representa, en este caso, apenas una fracción de la ganancia total, quedando más distante del punto óptimo en una relación costo/beneficio de la acción colectiva.

Por otro lado, el propio Olson asocia la percepción sobre el comportamiento de los demás a otras posibilidades resultantes de la estructura institucional: “Defino la ‘perceptibilidad’ en términos del grado de información y de los arreglos institucionales que en la verdad existen en cualquier grupo” (Olson, 1999, p. 58). Una condición que afecta la estructura institucional, dice respecto a la existencia de fronteras que la diferencian de su ambiente externo y definen las condiciones para el ingreso en la condición de miembro de la institución. Una elevada circulación, no obstante traiga consigo flujo de innovación y flexibilidad, amplía las dificultades y el costo para la provisión de una reserva de información compartida entre los miembros, capaz de reducir la incertidumbre sobre el comportamiento de cada uno. Con frecuencia, la información es el resultado de procesos de entrenamiento en que los individuos adquieren mediante la observación del comportamiento de los demás, repetidos a lo largo del tiempo, una posibilidad de firmar compromisos recíprocos, anticipando la posibilidad de que sean cumplidos o no por sus pares. Cuando la filiación y definición de quién es o no miembro de la organización son perturbadas por fronteras vagas, disminuye el potencial de monitoreo y la eficacia de la reputación, como norma para la acción individual.

En suma, parece haber una espiral de retroalimentación que hace que reglas y arreglos institucionales, repetidos en el tiempo, puedan generar normas y valores y éstos, a su vez, se cristalicen en instituciones sedimentadas. Variaciones diacrónicas en este proceso pueden explicar los diferentes modelos institucionales descritos por March y Olsen (1989), en la forma de instituciones *integrativas*, impregnadas por códigos de conducta más rigurosos (lógica de la apropiación); o instituciones *agregativas*, presididas por el cálculo de las consecuencias asociadas a las opciones y al curso de acción de cada uno. La densidad normativa de las instituciones *integrativas* puede ser el resultado de repeticiones convertidas en rutina, transformando, con el tiempo, cálculos racionales en códigos de conducta percibidos como obligatorios por todos los agentes.

La tradición constituida de Maquiavelo hasta Schumpeter, permitió a la ciencia política distinguirse de un pensamiento *ingenuo*, cuya representación caricaturesca se puede encontrar en los sermones de la *moral*. Con Schumpeter se descubre que la democracia no se singula-

riza por su superioridad normativa, convicción ética u obligatoriedad de justicia en sus resultados. Se trata crudamente de procedimientos que obligan a todos a someterse a la competencia por el acceso a los puestos de comando político. Con Dahl se comprende que la aceptación de estas reglas resulta, sobre todo, de un cálculo en el que el costo de la exclusión excede al de la tolerancia. Una dispersión en los recursos de poder que torne improbable o impracticable un oligopolio, o aún, eleve la incertidumbre en cuanto a los resultados y, por tanto, la posición de cada uno después de la competencia, tiende a convertir los diferentes agentes en practicantes de juegos de suma variable, como poliarquías, menos por el credo democrático (no obstante éste, por la rutina institucional puede venir a premiar o castigar reputaciones), y más por un cálculo de riesgos y oportunidades. Una perspectiva análoga se puede encontrar en el trabajo de Weingast (1997), para quien el desempeño democrático puede ser explicado menos por valores compartidos y más por la resolución de *problemas de coordinación* por los ciudadanos, que los habilita a imponer límites en los márgenes de acción de las autoridades constituidas.

Parece convincente suponer la convivencia de valores poco cívicos, como la desconfianza expresa en los políticos, partidos y el legislativo, con el recurso a redes de lealtad y acceso a distribución de beneficios concentrados del tipo electoral connection, configurando una integración al mundo de la política. El mismo individuo que repite, cuando se le pregunta todos los lugares comunes de aversión a la política, cede frente a la posibilidad de accionar contactos personales para satisfacer sus quejas y demandas. Según las palabras de un diputado, entrevistado por el autor en 1992: “Normalmente las personas dicen: los diputados no sirven. Y si uno está junto, ellos dicen, ‘menos tú’. Pero en verdad, están siempre hablando mal del Parlamento”. En este sentido, es posible entender la sugerencia de Rothstein y Stolle (2002, p. 9), que “Las personas compensarían su falta de confianza en las instituciones políticas aumentando sus asociaciones con otras personas en quienes ellos pueden confiar”.

Esta perspectiva parece más apta para explicar –de otra forma insólita– convivencia entre la afluencia democrática y el fenómeno de los *bosses* y de la maquinaria política en Estados Unidos de los años veinte al cuarenta. *Alianzas diádicas*, de naturaleza estrictamente personal;

alimentadas por la expectativa de ayuda mutua, en caso de necesidad forman parte de la configuración cultural de diferentes sociedades. No constituyen reminiscencias de sociedades tradicionales y agrarias, conservándose en el mundo urbano y moderno como *addenda* (Landé, 1977); es un mecanismo de adaptación que complementa y viabiliza el funcionamiento de instituciones, haciendo un puente entre su representación impersonal y formal y las prácticas cotidianas, impregnadas por confianza personal y racionalidad sustantiva, lo que puede explicar la distancia entre valores, palabras y comportamientos efectivos.

La concentración de los bienes electorales, la existencia de un flujo único de acceso a ellos, en contraste con la dispersión de las clientelas, limita la constitución de interacciones horizontales entre integrantes eventuales. Con todo, variaciones en el número de patronos alternativos y en el volumen de recursos efectivamente disponibles pueden alterar el equilibrio en los vínculos de lealtad, tornándolos más instrumentales, generando una situación de disponibilidad entre los electores. En este caso, lealtad puede convertirse en *estrategia*, constituyendo un vínculo más específico, de naturaleza casi contractual, entre individuos dotados de recursos similares, que optan por un intercambio discreto, entre bienes de valor ahora equivalentes. Por otro lado, como los altercados se alimentan de la expectativa por la contrapartida al apoyo prestado, cuando ésta no corresponde a lo esperado, el elector o el partidario *electoral* podrá buscar un mediador alternativo. En este sentido, es la observación de Rouquié: “En los países donde el sustrato social está dominado por configuraciones verticales, ciertas zonas de gran fluidez, especialmente en las ciudades, dan lugar al nacimiento de fenómenos de competición partidaria ‘clientelizada’, que permiten al elector una provechosa libertad de elección” (1992, p. 64). Diferente del *patrón*, el mediador es apenas un intermediario, que dispone de conexiones, sin tener, sin embargo, el control sobre los recursos que distribuye. Además de eso, está sujeto a la mayor concurrencia, lo que torna más precarios los vínculos con su clientela. En este caso, la lealtad asume contornos instrumentales, ocasión en que su confirmación está vinculada a la utilidad que pueda ofrecer a las partes. Un incremento en el número de partidos o candidatos hace que el apoyo sea más disputado, en cuanto desaparece la dependencia en relación con un único proveedor. Para el elector, su voto no constituye una obligación, que escon-

de cualquier posibilidad de cálculo, ni la oportunidad para compensar deudas impagables, pero una moneda con elevada búsqueda en el mercado, y adecuadamente dirigida, puede maximizar sus ganancias individuales.

Una fuerte expectativa metodológica producida en torno a los estudios del *capital social*, consiste en el recurso a los datos ofrecidos por investigaciones de opinión sobre las instituciones: “¿Cómo, entonces, podemos saber si la reserva de capital social de una sociedad está aumentando o disminuyendo? Una solución es confiar más en la segunda de las dos fuentes de datos –la investigación de los datos sobre confianza y valores” (Fukuyama, 2002, p. 494). Con frecuencia, opiniones emitidas por individuos sobre las instituciones como los partidos políticos y el legislativo se han utilizado como evidencia de la presencia generalizada de un fenómeno de crisis de los partidos y de la representación política (Lagos, 2001). El déficit de confianza registrado por diversos *barómetros* políticos es usado como inferencia para una supuesta pérdida de adhesión a los partidos y su consecuente crisis. El problema aquí reside no en el descrédito expreso en las encuestas, pero sí en la autorización de su lectura como evidencia de *crisis*. Esto queda claro, cuando se observa este fenómeno en relación con tres casos dotados de contornos claros: los índices de confianza en los partidos de Portugal (25%), España (22%) y Chile (13%)⁴, en flagrante contraste, no sólo con las evidencias acerca de sus respectivas tradiciones partidarias, sino también en relación con los niveles del *turnout* registrados en estas democracias –respectivamente, 69,2%, 73,8% y 72,8%⁵–, lo cual es muy sugestivo.

Pero hay un punto sobre el cual un diagnóstico de la “crisis de la democracia representativa” sugerida por la erosión del capital social y certificada por las mediciones de la confianza institucional podría tener sentido. Esta hipótesis sería válida si fuera confirmada por una demostración de un distanciamiento real, cuando no aversión, entre los ciudadanos y las instituciones responsables de la conversión de sus preferencias en políticas coherentes. Es decir, hablar de crisis de

⁴ Según el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercado y de Asesoramiento. www.gallup.com.ar

⁵ Véase www.idea.in

la democracia representativa, para ir más allá de los rumores ordinarios, adquiere significado analítico consistente, cuando es posible demostrar una disminución continua en la adhesión de los individuos a las organizaciones que representan, lo que se traduce en mayor imprevisibilidad y discontinuidad entre las relaciones entre partidos y electores, que cambiarían, de una elección a otra, la opción por la campaña que deberían apoyar. Señales del agotamiento de las instituciones representativas se podrían encontrar, por ejemplo, en la fluctuación del voto partidario. En contraste con un pasado de electorados dotados de identidades partidarias estables [especialmente en las experiencias de Europa Occidental], las últimas décadas supuestamente estarían presentando un fenómeno de electores volátiles, cambiando permanentemente sus opciones y partidos, entre una elección y otra.

“Elecciones críticas” ocurren en las mejores democracias, a lo largo del siglo XX. Su presencia, hoy, como antes, se verifica como fenómeno discreto, puntual, seguido por largos períodos de estabilidad electoral, a partir de este reacomodo. Esto se puede comprobar cuando se analizan índices agregados de volatilidad electoral, que permiten cotejar, por un período largo, los cambios partidarios verificados por el electorado, una elección tras otra. La edad de oro de las organizaciones partidarias europeas –las dos décadas entre la segunda posguerra y el final de los años sesenta– registró valores agregados de volatilidad partidaria equivalentes a 9%. Esto significa estimar en este percentual la proporción de electores fluctuantes entre cada disputa electoral. Por otro lado, entre los años ochenta y noventa –las décadas de la “crisis de la democracia representativa”–, los índices de volatilidad electoral fueron ligeramente inferiores, situándose en torno a 8,5% (Mair, 1997). Es decir, los electores continúan donde siempre estuvieron, votando por los partidos de su confianza.

La estabilidad en las opciones partidarias en las democracias de Europa Occidental se basó en divisiones sociales, religiosas, culturales, comunitarias, formadas antes de la introducción del sufragio universal. La consecuencia fue una asociación entre estructura social y sistema partidario. Los partidos tenían interés en dirigir segmentos para los cuales habría un nicho electoral. Una correspondencia entre electorados socialmente homogéneos y partidos ideológicamente orientados fue la base para la operación de las instituciones representativas en las viejas poliarquías.

Cambios en este cuadro ocurrieron desde los años setenta. La complejidad en la estructura social, mayor escolarización, estandarización cultural condujeron a un debilitamiento de las divisiones, con la disminución del interés basado en identidades sociales. Lo paradójico es que contrariando creencias y previsiones de los *barómetros* de opinión, los partidos no perdieron electores ni fueron sustituidos por otras organizaciones, y continuaron reclutando candidatos, atrayendo electores y formando gobiernos (Mair, 1997).

III. ¿Dependen las democracias del capital social?

La mayor apuesta de los modelos construidos en torno al capital social consiste en proponer que una reserva de valores sociales cooperativos constituye una condición para el establecimiento de un sistema político democrático nacional. En otras palabras, el capital social desempeñaría un papel de variable independiente en los procesos de institucionalización democrática. Para verificar esta hipótesis, se comparó un conjunto de países, con distintas configuraciones institucionales y valores culturales. La comprobación de esta proposición debería ser obtenida a través de la verificación de una asociación entre países dotados de elevados niveles de capital social y la presencia de instituciones capaces de satisfacer requisitos democráticos.

La información referente a los valores culturales fue aislada con base en el índice de capital social, producido a partir del World Values Study de 1995. Sus valores reflejan una composición entre una dimensión asociativa⁶ y otra de confianza social⁷. Sus resultados presentan variaciones significativas entre 47 naciones observadas, con los índices más elevados en países escandinavos y anglosajones y los más bajos en América del Sur y Estados pos-soviéticos del centro y el este de Europa.

⁶ “A continuación voy a leer una lista de organizaciones voluntarias; para cada una de ellas, ¿podría decirme si es un miembro activo, un miembro inactivo o si no es miembro de ese tipo de organización?”.

⁷ “En términos generales, ¿usted diría que la mayoría de las personas son confiables o que no se puede ser demasiado cuidadoso al tratar a las personas?”.

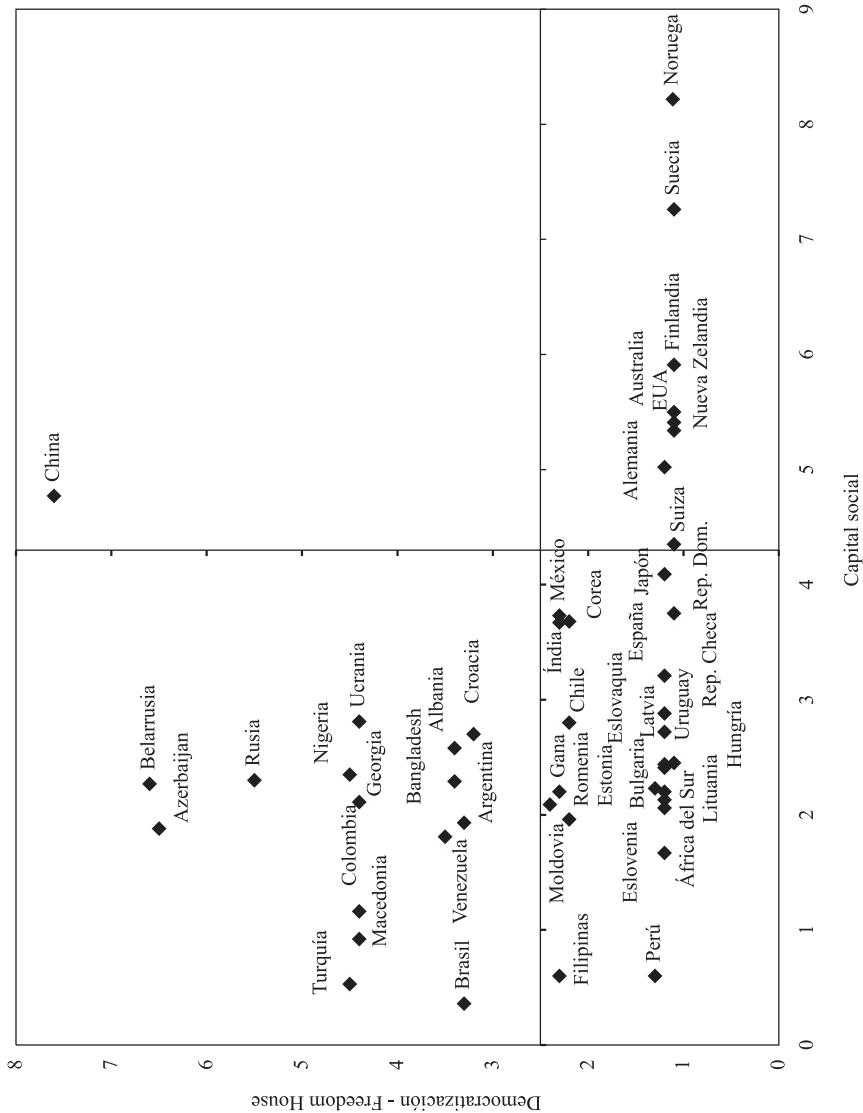
Existen diversos índices utilizados para formalizar y medir diversos grados de democratización alcanzados en diferentes sociedades nacionales. El índice empleado fue el generado por Freedom House (2003), producido a partir de una combinación de valores referentes a derechos políticos, libertades civiles, características del régimen político, expectativa de vida y renta per cápita. De esto resulta una clasificación en tres categorías: libre (índices entre 1,0 y 2,5), parcialmente libre (2,5 y 5,5) y no libre (por encima de 5,5). Muchas críticas (Mainwaring, Brinks y Liñan, 2001), probablemente pertinentes, se han dirigido a los problemas resultantes de esa clasificación, como la poca transparencia y un sesgo ideológico en la atribución de los valores. Examinando longitudinalmente los índices de *Freedom House*, es difícil comprender por qué Brasil habiendo alcanzado su nivel más democrático entre 1986 y 1990, habría caído a un estatus parcialmente libre después de 1992, tendencia especialmente notoria desde 1995, precisamente en un período en que la competencia electoral y la responsabilidad institucional parecen haber conocido un significativo incremento. De cualquier forma, a pesar de estos problemas, el uso de este indicador parece ser aceptable para los propósitos del trabajo. De la misma forma, aquí *free* será empleado como correlato de estatus democrático.

Las correlaciones observadas entre capital social y democracia parecen modestas: -0,401 (significativa a 0,01) entre el WVS y Freedom' 1995 y un poco menor: -0,343 (significativa a 0,05) entre los índices WVS y Freedom House 2001-2002. El intervalo temporal entre el levantamiento del *capital social* (1995) y los indicadores políticos recogidos en 2001 y 2002 no parece problemático, toda vez que permite justamente verificar la relevancia de los valores cívicos, como variable independiente. De la misma forma, según sus defensores, el capital social poseería validez de largo plazo, no debiendo ser, en esta perspectiva, afectado por imposiciones de corto plazo.

Comparando los índices Freedom House 1995 y 2001-2002, se establecen tendencias entre los 47 casos: 22 obtuvieron grados más democráticos, 19 permanecieron estables y 6 (Brasil, Venezuela, Rusia, Belarrusia, Ucrania y Macedonia) presentaron una caída en su desempeño democrático. La correlación entre estas tendencias y los índices de capital social fue, nuevamente, baja (0,114), sugiriendo que los valores sociales –o al menos aquellos medidos por este índice– no fueron capaces de predecir estos movimientos.

Instituciones o cultura: ¿de qué materia prima está hecha la legitimidad de las nuevas democracias?
 André Marenco dos Santos

Gráfico 1. Relación entre capital social y democratización.



Fuentes: Freedom House y World Values Survey.

Cuando se separa del conjunto de 47 países, las poliarquías institucionalizadas, aquí identificadas como las democracias estudiadas por Lijphart (1999; 2003), la correlación con éstas presenta valores significativos (-0,774, significativo a 0,01). Con todo, en los demás casos, la asociación entre capital social y grados de democracia son insignificantes (-0,003). Lo que puede ser leído de la siguiente forma: democracias longevas poseen valores comunitarios compartidos –aunque no sea posible saber si es causa o consecuencia de la rutinización de instituciones y reglas democráticas–. Por otro lado, las nuevas democracias, las democracias híbridas y no democracias, presentan reservas de capital social incongruentes con su estatus institucional. Por ejemplo, China (4,77) y Taiwan (4,80) presentan índices similares de capital social, en contraste con configuraciones institucionales completamente discrepantes. Así mismo, Belarrusia, Argentina y Bulgaria son no libre, parcialmente libre y libre, respectivamente aún registrando índices de capital social en niveles equivalentes.

La conclusión se puede resumir de la siguiente forma: sociedades nacionales con altos niveles de capital social casi siempre serán democracias (la única excepción es China), sugiriendo una incompatibilidad entre confianza social y asociativismo e instituciones autoritarias. Por otro lado, naciones con reservas más escasas de capital social pueden ser tanto democracias (22 casos) como *semi* o no democracias (15 casos). Entre los países que presentan los mejores desempeños institucionales según las notas conferidas por Freedom House, se puede observar un espectro que va desde Perú (índice de capital social igual a 0,60) hasta Noruega (8,28 en el mismo ítem).

La fragilidad del capital social como modelo interpretativo para las probabilidades democráticas es aún más evidente cuando los 47 casos se separaron, de acuerdo con los valores altos (arriba de 4,30) y bajos, y cotejados con las categorías libre, parcialmente libre y no libre, de Freedom House. El resultado se puede verificar en el cuadro 1.

Instituciones o cultura: ¿de qué materia prima está

hecha la legitimidad de las nuevas democracias?

André Marenco dos Santos

Cuadro 1. Distribución de casos nacionales según relación entre grados de democratización y capital social.

Freedom House	Capital social (WVS)		Total
	(+)	(-)	
Libre	09	22	31
Parcialmente libre	-	12	12
No libre	01	03	04
Total	10	37	47

Fuentes: Freedom House y World Values Survey.

Sería previsible, de acuerdo con el modelo de Putnam, registrar casos de naciones que combinan altos índices de capital social y niveles de desempeño democrático elevados. Tampoco sorprende verificar experiencias de precaria confianza y asociativismo, paralelo a instituciones nacionales parcial o no democráticas. Con todo, el hallazgo más notable ofrecido por los 47 casos, reside en los 22 países que presentan una configuración democrática al lado de bajos índices de capital social, desviándose, por tanto, de la predicción. Se puede encontrar, en esta situación, algunas de las poliarquías institucionalizadas de Lijphart (India, España y México), al lado de países con tradiciones democráticas, separadas por intervalos autoritarios (Uruguay y Chile), repúblicas pos-soviéticas del centro y el este de Europa, además de nuevas democracias africanas y asiáticas. Llama la atención el desempeño de Perú, cuyo índice en 1999 (5,4) lo situaba en la frontera entre naciones parcialmente libres y no libres, obteniendo, apenas dos años después, un indicador (1,3) semejante al de las poliarquías institucionalizadas, como consecuencia de los procedimientos de competencia electoral adoptados, refuerzo en la estructura judicial y rigor en el combate contra la corrupción pública (Freedom House, 2003). No deja de ser paradójico que los índices peruanos de confianza en la democracia y en los partidos políticos, medidos por el *Latinobarómetro*, hayan registrado un comportamiento inverso en el mismo período, presentando una caída en la preferencia por la democracia y en el crédito a los partidos políticos (The Economist, 2002).

La India tal vez represente el caso más significativo en este grupo. Con 35 lenguas, 15 oficiales y 22 mil dialectos; de su población, 1/3 vive debajo de la línea de la miseria absoluta y ½ con una renta mensual de US\$ 30; presenta, una tasa de analfabetismo que alcanza 50%

de su población (o 60% cuando se considera a la población femenina), y un complejo sistema de castas que confina a los individuos a oportunidades de residencia y ocupación exclusivas; la India debería constituir un caso de improbable integración en una comunidad nacional. Este enigma puede ser descifrado, siguiendo la sugerencia de Lijphart (1996), al ver en el sistema político indio una configuración de *power-sharing*: gobiernos de (grandes) coaliciones, representados, durante largos períodos, por la naturaleza heterogénea e integrativa del Partido del Congreso; autonomía cultural para comunidades lingüísticas y religiosas; representación ponderada (a despecho del *first-past-the-post system*) de minorías geográficamente concentradas y, por fin, las subdivisiones de lengua, casta y secta en el interior de la mayoría hindú, que le restringen el ejercicio de un poder mayoritario, garantizando a las minorías una capacidad de voto, permitiendo así, que se les asegure su autonomía y derechos. Con todo –sigue Lijphart–, desde el final de la década de 1960, esta arquitectura institucional tuvo sus componentes de dispersión de poder mitigados por un incremento en los mecanismos centralizadores de poder: liderazgo jerárquico y reducción de las diferencias intrapartidarias en el Partido del Congreso; ascensión de Bharatiya Janata Party con banderas contrarias a las minorías étnicas; centralización de la estructura federal; adopción de leyes civiles uniformes. Especialmente, revelador es la asociación –identificada por Lijphart– entre el debilitamiento del *consociativismo* institucional y el recrudecimiento de la hostilidad y violencia entre grupos sociales, étnicos y religiosos. Esto es, el cimiento que unió una sociedad tan heterogénea no fueron (inexistentes) valores culturales compartidos, pero sí, oportunidades ofrecidas por el arreglo institucional *consociativo*. Cuando éste se endureció, los valores culturales arraigados se tornaron bandera para la violencia social.

Una forma sintética de medir una dimensión de *power-sharing*, puede ser permitida por el registro de la proporción de las bancadas partidarias gubernamentales en los 47 casos en observación. La suposición aquí es la de que las mayorías unipartidarias aseguran al partido gobernista condiciones que le permitan mayor centralización decisoria y menor dependencia en relación con la negociación con minorías políticas. Inversamente, bancadas minoritarias de gobierno exigen mayor disposición para acuerdos y la preferencia por instituciones

que amplíen la oportunidad para la integración de oposiciones y reconocimiento de sus derechos. Incluso, porque, frente a la mayor incertidumbre en cuanto a los resultados electorales futuros, actores relevantes tienden a escoger modelos más próximos a juegos de sumavariante. Se consideraron las bancadas de partidos de primeros ministros o presidentes, conforme el sistema de gobierno, en la elección inmediatamente anterior a 2001. Nuevamente, los casos se dividieron entre aquellos que hacen parte de las poliarquías institucionalizadas, y los demás, y se compararon con respecto a la relación entre los índices de *Freedom House*, del capital social y de *power-sharing*. El resultado se puede analizar en el cuadro 2.

Cuadro 2. Relación con grados de democracia, según dos grupos de países⁸.

	Power-sharing	Capital social
Poliarquías institucionalizadas (12)	0,355	-0,727*
Poliarquías recientes y no poliarquías (35)	0,568*	-0,003

* Significativo a 0,01.

Fuentes: Freedom House, Elections around the World y Lijphart Elections Archive, Norris (2000).

La dimensión de las bancadas parlamentarias de los partidos políticos en el gobierno no constituye una variable relevante para explicar diferencias entre las antiguas democracias. Casos nacionales con configuración mayoritaria como Estados Unidos, Japón y próximamente, España, pero, sobre todo, la dinámica de poliarquías institucionalizadas, parece dispensar la incertidumbre producida por la fraccionalización parlamentaria como incentivo para mayor dispersión de poder. Entre estas naciones, el *capital social* está asociado a la democratización del sistema político.

Sin embargo, al considerarse sólo poliarquías recientes y no poliarquías, se vuelve notoria una correlación significativa entre el mejor desempeño democrático y los partidos gobiernistas de proporción le-

⁸ Power-sharing: correlación Pearson entre tanto por ciento de las bancadas partidarias gobiernistas y el Índice Freedom House. Capital social: correlación Pearson entre el Índice Freedom House y el Índice Capital Social. En éste último caso, los coeficientes son negativos una vez que los mayores grados de democracia, para Freedom House, corresponden a los valores inferiores.

gislativa más modesta. De estas evidencias se puede concluir que la frontera que separa nuevas poliarquías de instituciones no democráticas, no está separada por la exigencia de valores cívicos. Con excepción de Taiwan, todas las demás poliarquías recientes aquí observadas presentan baja reserva de capital social –en niveles semejantes a las no democracias–, handicap que no les impidió fundar instituciones democráticas. En compensación, presentaron una asociación significativa entre grados de democratización y la configuración de poder compartido, aislado a través de la dimensión de las bancadas gobiernistas en cada caso.

IV. Conclusión

La hipótesis que orientó este trabajo fue la de los valores sociales cooperativos que no constituyen una condición para el establecimiento de instituciones políticas democráticas en el plan nacional. Para verificar esta hipótesis, se comparó un grupo de países, con distintos modelos institucionales y valores culturales. Las correlaciones observadas entre indicadores de capital social y democracia fueron modestas. Viejas poliarquías poseen valores comunitarios compartidos –aunque no sea posible saber si es causa o consecuencia de la rutinización de instituciones y reglas democráticas–. Por otro lado, nuevas poliarquías, poliarquías híbridas y no poliarquías presentan reservas de capital social no correspondientes con su estatus institucional. De los 47 casos en observación, se ubicaron 22 países que presentan una configuración democrática al lado de bajos índices de capital social, desviándose, por tanto, de la predicción fundada en los modelos del *capital social*.

Además, se analizó la relación entre mayor dispersión de poder (*power-sharing*), medida por el tamaño de las bancadas partidarias gubernamentales y de democratización. La proporción de las bancadas parlamentarias de los partidos gubernamentales no constituyó una variable relevante para explicar diferencias entre las poliarquías institucionalizadas; pero al considerarse las poliarquías recientes y no poliarquías, apareció una correlación significativa entre mejor desempeño democrático y partidos gobiernistas de proporción legislativa más modesta.

Inaugurar experiencias poliárquicas, muchas veces sin tradiciones democráticas previas, supone crear estructuras de oportunidad que reduzcan la incertidumbre e incentiven estrategias concertadas por los actores relevantes. *Power-sharing*, en la perspectiva destacada por Lijphart, evita competencias del tipo suma-cero, amplía el costo para las mayorías unipartidarias e incentiva coaliciones gubernamentales amplias, como condición para el desempeño eficaz de las instituciones políticas. Éstas parecen ser coordenadas más precisas para la ruta de institucionalización poliárquica. En el futuro, series temporales perfeccionadas nos mostrarán si la rutina institucional de esas poliarquías tardías podrá afectar su reserva de valores cívicos, y entonces, conoceremos con más precisión las conexiones entre la democracia y el capital social.

Referencias

- DAHL, Robert (1997). *Poliarquia*. São Paulo, Ed. USP.
- _____ (1999). *On democracy*. New Haven, Yale University Press.
- FREEDOM HOUSE (2003). “Freedom in the world. Country ratings: 1972-73 to 2001-2002”. www.freedomhouse.org.
- FUKUYAMA, Francis (2002). “Capital social”, en: Lawrence E. Harrison & Samuel Huntington. *A cultura importa. Os valores que definem o progresso humano*. Rio de Janeiro, Record.
- HARRISON, Lawrence E. & HUNTINGTON, Samuel (2002). *A cultura importa. Os valores que definem o progresso humano*. Rio de Janeiro, Record.
- HUNTINGTON, Samuel (2002). “Prefacio”, en: Lawrence E. Harrison & Samuel Huntington. *A cultura importa. Os valores que definem o progresso humano*. Rio de Janeiro, Record.
- INGLEHART, Ronald (2002). “Cultura e democracia”, en: Lawrence E. Harrison & Samuel Huntington. *A cultura importa. Os valores que definem o progresso humano*. Rio de Janeiro, Record.

- LAGOS, Marta (2001). "How people view democracy. Between stability and crisis in Latin America", *Journal of Democracy*, 12(2):137-145, January.
- LANDÉ, Carl (1977). "The dyadic basis of clientelism", en: Stephen Schmidt; James Scott; Carl Landé and Laura Guasti (orgs.), *Friends, followers and factions: a reader in political clientelism*. Berkeley, University of California Press.
- LIJPHART, Arend (1996). "The puzzle of Indian democracy: a consociational interpretation", *American Political Science Review*, 90(2):258-268, June.
- ____ (2003). *Modelos de democracia. Desempenho e padrões de governo em 36 países*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel & LIÑAN, Anibal Pérez (2001). "Classificando regimes políticos na América Latina: 1945-1999". *Dados*, 44(4):645-687.
- MAIR, Peter (1997). *Party System Change. Approaches and interpretations*. Oxford, Oxford University Press.
- MARCH, James and OLSEN, Johan P. (1989). *Redescovering Institutions. The organizational basis of politics*. New York, Free Press.
- NOORGARD, Ole (2001). "Democracy, democratizaton and institutional theory". Paper presented for The ECPR Conference.
- NORRIS, Pippa (2000). "Making democracies work. Social capital and civic engagement in 47 societies". Exceter, Paper for Euresco Conference on Social Capital, University of Exceter, 15-20 september.
- NORTH, Douglass (1990), *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge, Cambridge University Press.

Instituciones o cultura: ¿de qué materia prima está hecha la legitimidad de las nuevas democracias?
André Marenco dos Santos

OLSON, Mancur (1999). *A lógica da ação coletiva. Os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais*. São Paulo, Ed. USP.

OSTROM, Elinor (1990). *Governing the commons. The evolution of institutions for collective action*. Cambridge, Cambridge University Press.

PÉCAUT, Daniel (1997). “Order and violence: the two sides of colombian stability”, en: F. Devot and T. Di Telle (orgs.). *Political culture, social movements and democratic transitions in South America in the Twentieth Century*. Milan, Feltrinelli.

PETERS, B. Guy (1999). *Institutional theory in political science. The new institutionalism*. London, Pinter.

PUTNAM, Robert (1995). “Bowling alone: America’s declining social capital”, *Journal of Democracy*, 6(1):65-78, January.

____ (1996). *Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna*. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas.

ROTHSTEIN, Bo and STOLLE, Dietlind (2002). “How political institutions create and destroy social capital: an institutional theory of generalized trust”. Budapest, Collegium Budapest, Project on Honesty and Trust: theory and experience in the light of post socialist experience, november, 22-23.

ROUQUIÉ, Alain (1992). “El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias”, en: Guy Hermet; Juan Linz y Alain Rouquié. *¿Para qué sirven las elecciones?* México, Fondo de Cultura Económica.

SATZ, Debra and FEREJOHN, John (1994). “Rational choice and social theory”, *The Journal of Philosophy*, XCI(2):71-87, February.

SKOCPOL, Theda (1997). “The Tocqueville problem. Civic engagement in american democracy”, *Social Science History*, 21(4):455-476, Winter.

TARROW, Sidney (1996). "Making social science work across space and time: a critical reflection on Robert Putnam's Making Democracy Work", *American Political Science Review*, 90(2):389-397.

THE ECONOMIST (2002). "Democracy clings on in a cold economic climate". August, 15th.

WEINGAST, Barry (1997). "The political foundations of democracy and the Rule of Law", *American Political Science Review*, 91(2):245-263, June.

